



Nicolás de Pedro
Investigador principal, CIDOB

Con su irrupción en Siria a finales de septiembre, Moscú ha sabido situarse, de nuevo, en el centro de los debates europeos. Situación que se ha visto reforzada tras los atentados terroristas de París del 13 de noviembre y su oferta inmediata de alianza con Francia para «combatir la amenaza común» que representa el Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés). La intervención rusa en Siria ha complicado un panorama ya de por sí complejo para la UE y su oferta de colaboración plantea una serie de dilemas y costes que Bruselas y los estados miembros deben evaluar cuidadosamente.

Con un despliegue inicial limitado, Rusia ha alterado por completo el panorama de la guerra y los escenarios para su eventual resolución. El Kremlin ha decidido asegurar, al menos hasta que se constituya una hipotética mesa de negociación, la supervivencia de Bachar al-Assad. Rusia ofrece cobertura aérea a las fuerzas terrestres del régimen reforzadas, según algunas informaciones, con unidades iraníes y miembros del Hezbollah libanés. El régimen sirio es, de acuerdo con los organismos internacionales y los actores humanitarios, el principal responsable de los padecimientos de la población civil siria, y sus ataques aéreos sobre zonas densamente pobladas son la clave fundamental en la crisis de refugiados. La intervención rusa del lado del régimen agrava, pues, la crisis humanitaria y, según Naciones Unidas, en las cuatro semanas iniciales de intensos bombardeos rusos, otros 120.000 sirios más se han visto forzados a abandonar sus hogares. De esta manera, si se mantiene este esquema, la intervención rusa puede propiciar más refugiados, no menos.

Los planes que barajaban algunos estados miembros de la UE para establecer una zona de exclusión aérea como medida de protección para la población civil desplazada han quedado desbaratados con el despliegue ruso. Los riesgos de colisión directa con aviones de combate (o sistemas antiaéreos) rusos o de contribuir a la consolidación de una guerra por delegación de escala regional son elevados. La UE se ha mantenido formalmente firme y unida en su respuesta ante la intervención rusa. En el punto 10 de las conclusiones sobre Siria de la reunión del Consejo de la Unión Europea del 12 de octubre se indica que los bombardeos rusos

que «van más allá de DAESH y otros grupos terroristas designados como tal por la ONU [] son una seria preocupación y deben cesar inmediatamente. Al igual que las violaciones rusas del espacio aéreo soberano de países vecinos» (léase Turquía).

Sin embargo, los atentados en París han alterado los parámetros de los debates. Hasta entonces, el rol de Bachar al-Assad en un escenario de transición nacional era uno de los ejes de las discusiones en el seno de la Unión. Ahora, tal y como ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores de España, García-Margallo, gana fuerza la idea de que Assad es «el menor de los males». A lo que se añade que ninguna de las alternativas actuales a su régimen generan la suficiente confianza como para galvanizar un apoyo europeo decidido y significativo y se teme un potencial caos y vacío de poder o, aún peor, la consolidación de algún régimen extremista suní y/o extensión del Estado Islámico.

Las opciones de Putin de obtener réditos de su intervención en Siria se ven reforzadas tanto por la ausencia de claridad estratégica de Estados Unidos como por la división y falta de voluntad de los europeos. Ambos elementos tienen como resultado los vaivenes y desorientación estratégica de una UE que actúa por impulsos reactivos ante las urgencias o grandes atentados y con escasa consistencia. Así, por ejemplo, en el caso de Siria la UE ha pasado de ignorar casi por completo la guerra a hacer una apuesta de máximos (resolución de conflicto, reconstrucción del país) para abordar la crisis de refugiados o, de forma más precisa, su impacto en el territorio europeo. Para evitar malentendidos: la crítica no es al planteamiento, sino a la falta de compromiso real y voluntad política detrás de este.

Y, pese a lo que esperan algunos, la irrupción rusa en Siria no solo no reducirá la carga para la UE, sino que aumentará los costes. No solo porque cabe el riesgo serio de que otras potencias regionales decidan, a su vez, aumentar su intervención en la guerra, sino porque los objetivos de Rusia van mucho más allá de Siria. Moscú busca, sobre todo, una carta negociadora con la que forzar su reacomodo con Occidente –con las sanciones como asunto prioritario– y, en creciente sintonía con China, cuestionar el orden internacional de la posguerra fría. El Kremlin, de hecho, no escatima esfuerzos a la hora de lanzar mensajes pretendidamente aleccionadores para Occidente. La insistencia de Moscú, por ejemplo, en la supuesta legalidad de su intervención en Siria conlleva una crítica explícita a intervenciones occidentales previas. Sin duda, la guerra de Irak de 2003 fue un profundo error estratégico cuyas nefastas consecuencias se arrastrarán, probablemente, durante décadas. Pero eso no legitima automáticamente las acciones de Rusia ni en Siria, ni en Ucrania, ni en ningún otro escenario.

Este posicionamiento de Moscú lleva implícito su deseo por deslegitimar y acabar con el principio de «responsabilidad de proteger». A la hora de abordar el caso sirio, el Kremlin insiste en el agravio del precedente libio, cuando, abusando del mandato del Consejo de Seguridad, Francia y el Reino Unido fueron mucho más allá del establecimiento de una zona de exclusión aérea y contribuyeron decisivamente a la caída del régimen de Gadafi. Pero el principio de «responsabilidad de proteger» pretende que en casos graves de violación de derechos humanos dentro de un Estado –pensemos en el genocidio de Ruanda o en las operaciones de

limpieza étnica en los Balcanes– la comunidad internacional no quede bloqueada por la primacía de la no injerencia y sea posible actuar por razones humanitarias. La idea subyacente es que la soberanía nacional no es absoluta, tiene límites y va acompañada de responsabilidades. Para Rusia, así como para China y muchos otros países, se trata de una suerte de «derecho de injerencia arbitrario» utilizado subrepticamente por las potencias occidentales al que se oponen frontalmente. De nuevo para evitar malentendidos: es legítima la crítica a la utilización del principio (precedente libro), pero la idea de «responsabilidad de proteger» se encuentra en una fase incipiente y la UE no debe facilitar su eliminación, sino la búsqueda de fórmulas para que genere un consenso más amplio dentro de la comunidad internacional.

Un último aspecto que no se debe perder de vista es que la estrategia diplomática del Kremlin se articula sobre lo que percibe como puntos débiles de la UE. Y así, las urgencias en la crisis de refugiados plantean un panorama favorable para el Kremlin. Por lo que no conviene esperar una gran preocupación por parte de Rusia con respecto a la dimensión humanitaria del conflicto. Pero Moscú tampoco dispone de mucho tiempo. Bruselas atrapada en su complejo (y en ocasiones penoso) proceso de toma de decisiones –lo que agudiza su tendencia a la autoflagelación– suele asumir la imagen de un Putin fuerte e invulnerable. Pero es la debilidad –causada por la caída de los precios del petróleo, el efecto de las sanciones y las incertidumbres de la economía china– y no la fortaleza lo que impulsa esta arriesgada apuesta de Moscú en el escenario sirio, cuyo éxito, por cierto, dista mucho de estar asegurado.

